

EL ESTADO, ¿ENEMIGO DE LOS CIUDADANOS?

Por obra y gracia de los políticos profesionales, los ciudadanos vivimos en una permanente confrontación con el Estado, porque cada día se hace mayor la distancia entre nuestros intereses y los de ese ente abstracto. El Estado no solo hace nuestra vida intolerable imponiendo gabelas, trámites y papeleos que nos empobrecen y nos martirizan aún antes de nacer y después de morir, sino que nos reprime con gases, palos o balas cuando objetamos sus abusos.

Claro que, sea para crear nuevos impuestos o para negar demandas salariales, los gobernantes tienen argumentos de sobra, avalados además por los organismos internacionales de crédito. Según el dogma neoliberal, las crisis sobrevienen cuando el gasto público excede a los ingresos, y la receta fondomonetarista consiste en equilibrarlos, lo cual solo es posible creando nuevos impuestos, ya que sería una barbaridad pensar en despedir a burócratas bien pagados o rebajar los sueldos de ministros, diputados y altos funcionarios.

De ahí que los tecnócratas oficialistas aseguren que la reciente elevación de los precios de los carburantes era necesaria para conjurar la crisis ocasionada por los excesos del anterior régimen. Pero se pretende también justificar el alevoso "gasolinazo" con el increíble argumento de que es necesario generar fondos para el plan gubernamental de Lucha contra la Pobreza, cuya estrategia parece consistir no en arremeter contra la pobreza, sino contra los pobres para que financien su propia muerte por inanición.

Siguiendo la tradición política, el decreto se dictó un ya agonizante y estratégico día viernes, o sea en un fin de semana, para pillarnos a todos en calzoncillos y sin posibilidad de reaccionar. El efecto inmediato fue un desconcierto absoluto: subieron caprichosamente los precios de las papas, las cebollas, las lechugas, etc.; el transporte público elevó sus tarifas sin medida ni concierto; y todos los comerciantes agravaron el garrotazo especulando a su antojo. Entretanto, los gobernantes de ayer acusan a los de hoy de ineptitud y estos acusan a aquellos de haber dejado un país en quiebra, obligando a dictar duras medidas. Es la eterna historia de la pesada herencia que debe arrastrar todo nuevo régimen por las tropelías cometidas por el precedente. Pero, recuperado el pueblo de la desagradable sorpresa, cualquier cosa puede ocurrir.

En poco tiempo más, el enfrentamiento entre el Estado y el pueblo será más dramático, porque las organizaciones laborales y la ciudadanía en general están afilando uñas y dientes ante la fatal alza de las tarifas de todos los

servicios públicos, de los establecimientos educativos, de la atención médica y de todo cuanto signifique transacción comercial, ya que estamos regidos por un sistema de libre mercado en el cual todo el mundo tiene derecho a cobrar lo que le venga en gana por su mercadería o por sus servicios. Lo mas grave es que se ha anunciado, solapadamente, la creación de nuevos impuestos con el argumento de "ampliar el universo de contribuidores", a la par que se ha dispuesto la congelación de los salarios.

Si el Estado insiste en que todos tenemos la obligación de contribuir a su sostenimiento, debe también atender a los fines para los cuales fue creado, y tratar a sus burócratas sin privilegios intolerables para el ciudadano común. Si nos exige más sacrificios, debe darnos algo cierto a cambio, y no hueras esperanzas. Pero el Estado es una ficción que solo se hace tangible a través de pocas personas, siempre mas gordas y prosperas que los flacos ciudadanos, de modo que lo confundimos con un regimen de gobierno, o sea con individuos encaramados en el poder para usufructuarlo y que nos ven solo con caras de jornaleros obligados a tributar.

Presidentes, ministros y altos funcionarios pretenden estructurar un Estado moderno gobernando con mentalidad de reyezuelos feudales, cubriendo el gasto público mediante exacciones a sus vasallos. Piensan como aquel buen rey francés que decía "El Estado soy yo", de modo que en nuestra precaria democracia subyacen estructuras de poder temporal que tienden a confundirse con el Estado mismo. Entonces, aunque el Estado conserve la capacidad legal para imponer gabelas, ha perdido la capacidad moral; y se produce una situación que contradice los fundamentos mismos de nuestro sistema de organización social y política: los ciudadanos enfrentados con el Estado, institución que ya no es útil para sus propios fines porque solo sirve para exigir derechos sin reconocer obligaciones.

La doctrina ha evolucionado mucho desde el medioevo, y las políticas tributarias ya no sirven para llenar las faltriqueras de los dueños del Estado ni tienen simplemente una finalidad fiscal. El fundamento de todo impuesto radica en la soberanía del Estado, y la coacción es su principal elemento; pero no se puede imponer gabelas sin el consentimiento de los contribuyentes, aunque este consentimiento no surja como manifestacion de una voluntad individual, y sea mas bien indirecto. En el peor de los casos, esto significa que, en un Estado representativo, solo el Legislativo puede crear o elevar impuestos; pero aqui lo hace el Ejecutivo, unilateralmente y sin pudor.

El principio de la universalidad y generalidad de los impuestos está también limitado por el concepto de la capacidad contributiva; o sea que, aunque el Estado este lejos de la realidad psíquica y de las vivencias de los ciudadanos, todos deben contribuir en proporción a su propia capacidad. Esta idea es tan antigua como Adam Smith; pero nuestros gobernantes la ignoran.

Lo más incongruente y cínico es que se empobrece más al pueblo con el argumento de que el Estado necesita recursos para combatir la pobreza.

AUTOR: *Waldo Peña Cazas*, **Periodista**

Responsable de edición: [María Lohman](#)